

TREINTA AÑOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CANÓNICA. BALANCE Y PERSPECTIVAS

+ Zenon Grocholewski

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. I. EL PRINCIPIO SÉPTIMO EN LO QUE SE REFIERE A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA: 1. Constatación principal. 2. Ulteriores especificaciones. 3. Dos factores que motivan las propuestas. 4. Dos objetivos. II. DESPUÉS DE ESOS POSTULADOS: 1. Actividad de la segunda sección de la Signatura Apostólica. 2. Reforma legislativa respecto a la justicia administrativa antes de acudir a la segunda sección de la Signatura Apostólica. 3. Discusión entre los canonistas. 4. Propuestas y experimentos en el nivel de las Iglesias locales. III. SITUACIÓN ACTUAL A LA LUZ DEL PRINCIPIO SÉPTIMO: 1. Se ha asegurado el derecho de defensa y a la vez se ha dado también un remedio contra la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad ejecutiva en la Iglesia. 2. Potenciación de las soluciones extrajudiciales en perjuicio de los tribunales administrativos locales. 3. Realización de otras especificaciones particulares. 4. Otros perfeccionamientos de la justicia administrativa. 5. Elementos que han de perfeccionarse. 6. Conclusión.

INTRODUCCIÓN

a) La cuestión de la justicia administrativa canónica se ha discutido en estos últimos treinta años con gran vivacidad y empeño. Es más, parece haber sido un problema candente. En efecto, si se confronta, por una parte, el n. 7 de los *Principia*, según los cuales debería haberse desarrollado la reforma del Código, aprobados

durante la primera Asamblea general del Sínodo de los Obispos, el 7 de octubre de 1967¹, y, por otra, la legislación y la realidad actual sobre la materia, parece darse una fuerte divergencia, sobre todo por lo que se refiere a la erección de tribunales administrativos locales.

Así pues, para dar respuesta al tema que me ha propuesto esta Revista, reproduciré aquí sustancialmente mi ponencia, desarrollada originalmente en italiano, durante la jornada de estudio que tuvo lugar el 14 de mayo de 1998, dedicada precisamente al principio n. 7 –en el ámbito del programa de Seminarios organizados por la Facultad de Derecho Canónico del «Pontificio Ateneo della Santa Croce» en Roma, con ocasión de los «Treinta años de la aprobación de los *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*»–, para ver en qué medida, también a la luz del Concilio Vaticano II, esos principios «han sido acogidos por el Código de 1983, por la legislación posterior y por la concreta experiencia jurídica de la Iglesia».

b) La pregunta principal que se nos plantea es la siguiente: ¿se debe hablar de una «infidelidad» al mencionado principio por parte de la legislación y de la realidad jurídica actual en materia de justicia administrativa, o más bien de una maduración?

La respuesta puede venir sólo de una consideración global de la cuestión. Para poder darla, desarrollaré mi intervención en tres párrafos. Primero presentaré el principio de que hablamos en lo que se refiere a la justicia administrativa, atribuyendo una especial importancia, como es obvio, a los factores que lo motivaron y al objetivo que se pretendía alcanzar (I). Después trataré brevemente del dinamismo operativo dirigido a mejorar en la Iglesia el sistema de los recursos administrativos, en virtud de

¹. *Communicationes* 1 (1969) 77-85, en italiano en *Enchiridion Vaticanum*, vol. II, pp. 1359-1377, nn. 1699-1713. Respecto a la elaboración de estos *Principia* y a la discusión sobre ellos en el aula sinodal, Cfr *Communicationes* 1 (1969) 86-100; G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi*, Roma 1968, 83-139.

ese principio (II). Finalmente, trataré de presentar la realidad actual en lo que se refiere a la posibilidad de la defensa de los fieles frente a la autoridad ejecutiva en la Iglesia, haciendo un balance de conjunto e indicando los aspectos que han de perfeccionarse (III).

I. EL PRINCIPIO SÉPTIMO EN LO QUE SE REFIERE A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

1. *Constatación principal*

El n. 7, en su referencia a la justicia administrativa, es sin duda uno de los puntos más fuertes que encontramos en los *Principia* aprobados durante la primera Asamblea general del Sínodo de los Obispos en 1967. Allí se lee:

«Mientras que los recursos y las apelaciones judiciales se consideran suficientemente regulados según las exigencias de la justicia en el Código de Derecho Canónico, la opinión común de los canonistas considera, por el contrario, que los recursos administrativos son muy deficientes en la praxis eclesiástica y en la administración de justicia. De ahí que por doquier se experimente la necesidad de establecer en la Iglesia tribunales administrativos según los distintos grados y especies, de modo que la defensa de los derechos encuentre en ellos un procedimiento propio y canónico que se desarrolle normalmente ante las autoridades de diverso grado».

Esta constatación es muy dura y resuelta. En efecto, se afirma: a) una fuerte carencia en lo relativo a la justicia administrativa en la Iglesia; b) la opinión común de los canonistas sobre esa carencia; c) la necesidad, sentida en todas partes, de constituir en la Iglesia una red de tribunales administrativos según grados y especies.

La valoración resulta aún más drástica por presentarse sobre el telón de fondo del juicio sustancialmente positivo acerca de la

administración de la justicia ordinaria en el momento de la elaboración de los *Principia*.

2. *Ulteriores especificaciones*

Además de esta afirmación fundamental encontramos en el n. 7 de los *Principia* algunas especificaciones ulteriores. Así, se establece que el Código deberá:

— Determinar *qué actos* podrán ser impugnados ante los previstos tribunales administrativos y *en qué aspectos*, esto es, «establecer en concreto qué acciones pueden ser encomendadas al juicio de los tribunales administrativos». A este propósito se hace notar además que, mientras que «es más fácil organizar la justicia administrativa respecto a los actos administrativos [singulares]», sería más difícil ordenarla si se consideraran impugnables ante los tribunales administrativos «las normas [o sea, actos administrativos generales] de grado inferior, si y en la medida en que contradijeran a las de grado superior».

— Determinar el *procedimiento*, o sea, «las reglas del proceso administrativo». Respecto al procedimiento se afirman dos principios que han de observarse en todo caso: *a)* «el principio de tutela jurídica se ha de aplicar igualmente a los superiores y a los súbditos»; *b)* «es de desear que se tenga como regla general que todo proceso sea público, a menos que el juez, por las particulares circunstancias de las materias y de las personas, en casos bien determinados, haya considerado oportuno proceder en secreto». En consecuencia «se requiere que se pongan en conocimiento del recurrente [...] todos los motivos aducidos en su contra».

— Igualmente, establecer las *estructuras*, es decir, «los organismos ante los cuales puedan tratarse esos procesos».

3. *Dos factores que motivan las propuestas*

Para interpretar rectamente estos postulados con vistas a su realización, no se puede prescindir de los *motivos* que los sostuvieron, ni de los *finés* que se quiso conseguir con ellos (evidentemente, son dos cosas estrechamente interrelacionadas). Por lo que concierne a los motivos, no es difícil percibir que estos requerimientos o propuestas eran postulados principalmente por dos factores:

- a) *La ausencia de posibilidad de una defensa eficaz de los fieles frente a la actividad de la autoridad ejecutiva en el derecho precedente*

En efecto, según el derecho vigente en el momento de la formulación de los *Principia*, quien quisiera impugnar un acto de la autoridad administrativa en la Iglesia disponía sólo de la posibilidad de recurso a la autoridad jerárquicamente superior hasta la decisión del correspondiente dicasterio de la Curia Romana. Como máximo se podía solicitar al dicasterio un nuevo examen presentando nuevos motivos.

Ese sistema en realidad no ofrecía la posibilidad de una defensa adecuada: el recurrente, que normalmente no conoce la ley como un órgano administrativo, no tenía derecho a servirse de un abogado que pudiera ser adecuado interlocutor de la autoridad administrativa; no tenía tampoco la posibilidad de ver las actas y, por tanto, de conocer todos los motivos y argumentos aducidos en su contra, cosa que es presupuesto esencial para poder defenderse; tampoco se requería que las decisiones administrativas fueran motivadas, y esto se aplicaba también a las que constituían la respuesta al recurso jerárquico.

Dicho sistema –que se refería sólo al recurso jerárquico– era defectuoso también por motivos psicológicos: la relación de dependencia administrativa entre los órganos jerárquicamente ordenados puede hacer difícil la objetividad de juicio; además, el órgano administrativo «se ve habitualmente llevado a experimentar como preeminentes las exigencias de la práctica», y no siempre consigue suficientemente ver «si esas exigencias se han armonizado con otras superiores: con las de la justicia, a las que por definición se adecua la ley»².

Por tanto, se comprende bien el duro juicio expresado al respecto en los *Principia*.

b) *La constatación de que el Concilio Vaticano II ha reafirmado con fuerza la dignidad de la persona humana y sus derechos inviolables*

Esto se afirma claramente en la relación hecha por el Card. Pericle Felici en el aula de la mencionada Asamblea general del Sínodo de los Obispos sobre los *Principia*: «Lo que el Concilio Ecuménico tantas veces y con tanta firmeza ha expuesto, e incluso ha exaltado con palabras sublimes, respecto a la dignidad de la persona humana y sus derechos inviolables, que han de respetarse en todas partes, en cuanto están radicados fundamentalmente en la naturaleza humana, con mayor razón debe mantenerse en la Iglesia, porque los fieles, por el bautismo, se insertan en el misterio de Cristo, e incorporados a Cristo adquieren una nueva dignidad y personalidad»³.

². E. GRAZIANI, *De iustitia administrativa* (lezioni tenute allo Studio Rotale), ed. ciclost., Romae 1973, 97.

³. «Quae Concilium Oecumenicum toties ac tanta gravitate protulit atque elatis verbis exaltavit de dignitate personae humanae deque eiusdem iuribus inviolabilibus ubique servandis, utpote quae in natura humana fundamentaliter sint radicata, eo magis in Ecclesia tenenda sunt, quod Christifideles per bap-

También en la literatura canónica los autores conectaban comúnmente, y conectan, la correcta orientación de la justicia administrativa en la Iglesia con la relevancia de los derechos de los fieles, que podría correr el riesgo de quedar en letra muerta si no existiese una adecuada posibilidad de defenderlos.

4. *Dos objetivos*

Respecto a los objetivos que se intentaba alcanzar con una reforma que comportase la creación de dichos tribunales administrativos, por el contexto resulta que eran sustancialmente dos:

a) Proveer a la posibilidad de una adecuada *defensa de los derechos* de los fieles frente a los actos administrativos de las autoridades eclesásticas. Esto se afirmó ya claramente en el n. 6 de los *Principia*, donde se lee: «Se plantea una cuestión verdaderamente grave que ha de resolverse en el futuro Código, a saber, de qué modo deben definirse y tutelarse los derechos de las personas [...]. A cada fiel se le deben reconocer y tutelar los derechos, tanto los que se contienen en la ley natural o divina positiva, como los que derivan de la condición social que adquieren y poseen en la Iglesia».

b) Excluir *la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad ejecutiva*, o sea administrativa, en la Iglesia. Esto viene recalcado también en el principio n. 7, cuando se afirma la necesidad de proclamar en el derecho canónico que la tutela jurídica debe aplicarse de modo igual a superiores y súbditos, «de tal modo que se desvanezca por completo cualquier sospecha de arbitrariedad en la administración eclesástica».

tismum mysterio Christi inserantur et novam dignitatem atque personalitatem Christo concorporati adquireant» (*Communicationes* 1 [1969] 89).

II. DESPUÉS DE ESOS POSTULADOS

Las consecuencias operativas de estas determinaciones en los *Principia*, en el campo del derecho canónico, se han desarrollado por las siguientes cuatro vías, conectadas entre sí:

1. *Actividad de la segunda sección de la Signatura Apostólica*

Cuando se discutían y aprobaban los *Principia*, ya se había llevado a cabo una importantísima reforma al respecto con la Const. Ap. *Regimini Ecclesiae universae*, del 15 de agosto de 1967⁴, aunque todavía no había entrado en vigor. En efecto, la Constitución no entró en vigor hasta el 30 de marzo de 1968⁵. Con este documento pontificio se constituyó ya un verdadero tribunal administrativo, la entonces llamada *Sectio altera* de la Signatura Apostólica, a la que se podía recurrir después de haber intentado con resultado negativo el recurso jerárquico. Así comenzó la experiencia del primer tribunal administrativo en el nivel de la Santa Sede.

La actividad de aquel tribunal fue acompañada además de numerosas precisiones ulteriores o integraciones normativas⁶, que

⁴. AAS 59 (1967) 885-928, art. 106.

⁵. Cfr Rescripto de la Secretaría de Estado *De vacatione legis Constitutione Apost. «Regimini Ecclesiae universae» latae*, del 30 de diciembre de 1967, en AAS 60 (1968) 50.

⁶. Cfr Z. GROCHOLEWSKI, *Die Verwaltungsgerichtsbarkeit der Apostolischen Signatur*, in *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 40 (1991) 322; idem en italiano *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, en *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 3-22; idem en español *La justicia administrativa ante la Signatura Apostólica*, en *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 4 (1997) 177-197; ID., *Il processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica*, en *Forum* 7 (1996) II, 277-287; idem en eslovaco *Sporovy administratívny proces na Apostolskej Signatúre*, en *Ius et Iustitia*, vol. V, Spisské Podhradie 1997, 217-230.

se encuentran en varias interpretaciones auténticas⁷, así como en otros documentos, como el *Regolamento Generale della Curia Romana*, de 1968⁸; las *Normae Speciales* de la Signatura Apostólica, del mismo año⁹; el *Código de Derecho Canónico*, de 1983¹⁰; la Const. Ap. *Pastor bonus*, de 1988¹¹; el *Código de los Cánones de las Iglesias Orientales*, de 1990¹²; y el *Regolamento Generale della Curia Romana*, de 1992¹³.

2. Reforma legislativa respecto a la justicia administrativa antes de acudir a la segunda sección

a) Además de la mencionada experiencia de la Signatura Apostólica, acompañada por continuos perfeccionamientos normativos, la Pontificia Comisión para la revisión del Código de

⁷. De 11 de enero de 1971, en AAS 63 (1971) 329-330; del 1 de julio de 1971, en AAS 63 (1971) 860; del 1 de julio de 1976, en AAS 68 (1976) 635; del 7 de julio de 1978, en AAS 70 (1978) 534; del 21 de marzo de 1986, en AAS 78 (1986) 1323; y del 22 de abril de 1987, en AAS 80 (1988) 1818.

⁸. AAS 60 (1968) 129-176. Cfr especialmente arts. 68-70, 91, 94-95, 122.

⁹. No se han publicado en AAS, sino en un fascículo separado: *Typis Polyglottis Vaticanis* 1968, además de en algunas revistas, colecciones de documentos y apéndices de libros. Cfr, por ejemplo, *Periodica* 59 (1970) 75-161, *Apollinaris* 53 (1970) 249-280; X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. III, Roma 1972, cols. 5321-5332; I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. I, Romae 1977, pp. 372-398, nn. 3022-3152.

¹⁰. Especialmente en cuanto ha abrogado la norma según la cual las decisiones de la Signatura Apostólica eran válidas aunque no contuviesen los motivos (Cfr Z. GROCHOLEWSKI, *La Segnatura Apostolica nell'attuale fase di evoluzione*, en AA.VV., *Dilexit Iustitiam*, studia in honorem Card. A. Sabbatani, curantibus Z. Grocholewski et V. Cárcel, Città del Vaticano 1984, pp. 218-219, 224-225), cosa que sin duda tiene gran importancia también, y quizá sobre todo, para la segunda sección de ese tribunal apostólico.

¹¹. AAS 89 (1988) 841-934, Cfr art. 123. La Constitución entró en vigor el 1 de marzo 1989 (Cfr *ibid.* p. 912).

¹². Cfr c. 1006.

¹³. AAS 84 (1992) 201-267. Cfr especialmente arts. 110, 118-122.

Derecho Canónico estaba trabajando en el ulterior perfeccionamiento de la justicia administrativa eclesiástica, especialmente en el nivel de las Iglesias locales, según las indicaciones contenidas en los *Principia*¹⁴.

Durante todo el período de preparación del Código, desde el primero al último *schema*, se preveía la institución de los tribunales administrativos locales y una normativa sobre los correspondientes procesos. En el último momento, sin embargo, casi en vísperas de la promulgación del Código, esa normativa se eliminó y, en realidad, no se encuentra en el Código de 1983, aunque éste parece no excluir la posibilidad de esos tribunales (cfr cc. 149 § 2, 1400 § 2)¹⁵.

b) En cualquier caso, la Pontificia Comisión, en lo que se refiere al perfeccionamiento de la justicia administrativa, no se limitó a la cuestión de los tribunales administrativos locales, sino que se ocupó también: a) de la cuestión de los actos administrativos impugnables y b) de la solución de las controversias originadas por un acto administrativo eclesiástico en el ámbito de la misma autoridad administrativa, atribuyendo una particular relevancia a las soluciones pacíficas de las controversias.

Un paso más, e importante –respecto a la solución de los conflictos en el ámbito de la autoridad administrativa en el nivel de la Curia Romana–, se dio con ocasión de la reforma de la Curia Romana mediante la Const. Ap. *Pastor bonus* en 1988 y

¹⁴. Cfr *Communicationes* 2 (1970) 191-194; 4 (1972) 35-38; 5 (1973) 40, 235-243; 6 (1974) 32-33, 112, 219; 8 (1976) 198-200; 9 (1977) 72; 15 (1984) 78-90; 19 (1987) 303-304.

¹⁵. Sobre la no exclusión de esa posibilidad en el Código de 1983, Cfr Z. GROCHOLEWSKI, *Atti e ricorsi amministrativi*, en *Apollinaris* 57 (1984) 516-518; idem en el volumen *Il nuovo Codice di Diritto Canonico* ("Utrumque Ius", 9), Roma 1983, pp. 273-275; R. J., CASTILLO LARA, *Some General Reflections on the Rights and Duties of the Christian Faithful*, en *Studia Canonica* 29 (1986) 25, nota 50.

con la publicación del *Regolamento Generale della Curia Romana* de 1992¹⁶.

3. *Discusión entre los canonistas*

La actividad de la segunda sección de la Signatura Apostólica, la legislación al respecto, los citados esfuerzos de la Pontificia Comisión dirigidos a perfeccionar la justicia administrativa en la Iglesia y las reformas llevadas a cabo, corrían parejas con una viva y abundante discusión en la literatura canónica¹⁷.

En la canonística, sobre todo antes de la promulgación del Código, existían un entusiasmo y un convencimiento muy generales sobre la necesidad de instituir en la Iglesia los tribunales administrativos locales. No faltaba, sin embargo, alguna voz discordante. En cambio, tras la promulgación del Código, ese entusiasmo se debilitó no poco. Mientras que algunos se mostraron desilusionados, otros comenzaron a apreciar las razones por las que se había preferido renunciar al establecimiento de una red de tribunales administrativos en beneficio de la búsqueda de otras soluciones.

¹⁶. Cfr loca cit. *supra*, en las notas 11 y 13.

¹⁷. Para una reseña bibliográfica hasta el año 1980, Cfr I. GORDON-Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem cum notis bibliographicis et indicibus*, vol. I, Romae 1977, nn. 2115, 2116, 2156, 3005, 3023, 3154, 3160 (respectivamente pp. 329-331, 341, 369-370, 372-373, 398-399); vol. II, Romae 1980, nn. 5551, 5565, 5567, 6389-6396 (pp. 146, 149, 303-307).

Para los años 1980-1990 Cfr F. SALERNO, *Il giudizio presso la «Sectio Altera» del S. T. della Segnatura Apostolica*, en AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa* ("Studi Giuridici", vol. 24), Città del Vaticano 1991, pp. 126-128, nota 4.

Para no hacer demasiado farragosa esta nota, he incluido un elenco bibliográfico de los escritos posteriores en apéndice a este artículo.

4. *Propuestas y experimentos en el nivel de las Iglesias locales*

Junto a los trabajos de la Pontificia Comisión para la revisión del Código, y paralelamente a ellos, en las Iglesias locales de varios países se hicieron experiencias y se elaboraron también proyectos concretos sobre la materia¹⁸.

Pienso aquí principalmente: *a)* en el proyecto elaborado bajo el patrocinio de la Conferencia episcopal de los Estados Unidos de América Septentrional, bajo el título *On Due Process* («El proceso debido»), aprobado «ad modum experimenti» por la Santa Sede en 1971; *b)* en el proyecto titulado *A Conciliation Procedure* («Un procedimiento de conciliación»), preparado en 1973 por la Asociación de Canonistas de Gran Bretaña e Irlanda, a petición de la Conferencia episcopal local; *c)* en la propuesta, elaborada en Nueva Zelanda, de instituir en el ordenamiento canónico una figura particular del oficio de *Ombudsman*; *d)* en la propuesta lanzada en la Archidiócesis de Milán de un *Consejo diocesano de justicia*; *e)* en las diversas oficinas de arbitraje y conciliación erigidas en Austria¹⁹; *f)* en la *Kirchliche Verwaltungsprozessordnung der Kirchenprovinzen Bayern* («Ordenamiento del procedimiento administrativo en las provincias eclesiásticas de Baviera»), de 1971; y *g)* en la *Ordnung für Schiedsstellen und Verwaltungsgerichte der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland: Kirchliche Verwaltungsgerichtsordnung* («Ordenamiento para los tribunales de

¹⁸. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali regionali amministrativi nella Chiesa*, en AA.VV., *De iustitia administrativa in Ecclesia* («Studia et Documenta Iuris Canonici», moderante Pio Fedele, vol. 11), Roma 1984, 135-165. Se trata de un artículo que resume esas propuestas y experiencias.

¹⁹. «Ordnung für Pastorale Schiedsgerichte» en la Archidiócesis de Viena; «Statut für die diözesane Schlichtungs- und Schiedsstelle» en la diócesis de Graz-Seckau; «Statut für die Schlichtungs- und Schiedsstelle» en la diócesis de Linz; «Ordnung für pastorale Schiedsinstanzen» en la diócesis de Eisenstadt. Cfr también —respecto a Suiza— «Statut für die Verwaltungsrechtspflege» en la diócesis de Chur.

arbitraje y para los tribunales administrativos de las diócesis en la República Federal de Alemania»), elaborado por voluntad del Sínodo nacional de la República Federal Alemana que tuvo lugar en los años 1971-1975 en la ciudad de Würzburg, y aprobado por el mismo Sínodo el 19 de noviembre de 1975.

De todos modos, esos proyectos, cuando han entrado en vigor (por ejemplo, USA, Austria), han tenido escasísima aplicación.

III. SITUACIÓN ACTUAL A LA LUZ DEL PRINCIPIO SÉPTIMO

Observación preliminar de naturaleza metodológica

Puesto que se trata de emitir un juicio acerca de la situación actual de la justicia administrativa en la Iglesia –es decir, sobre el resultado de la actividad que acabo de delinear– a la luz del n. 7 de los *Principia*, me parece necesario ante todo preguntarme si se han conseguido sanar los *defectos* o las carencias que se enunciaban en ese principio y si, en consecuencia, se ha conseguido alcanzar el *objetivo* final allí propuesto. A esto responderé en el punto primero (1). Después me fijaré en la cuestión de los tribunales administrativos locales, o sea, en el *medio* previsto en los *Principia*, con el que en 1967 se pensó que podía alcanzarse ese objetivo (2). Posteriormente, me ocuparé de otras especificaciones que se encuentran en el n. 7 de los *Principia* sobre la justicia administrativa a la luz de la realidad actual (3). Entonces indicaré esquemáticamente otros perfeccionamientos que se han llevado a cabo respecto a la justicia administrativa en la Iglesia (4). A continuación, trataré de indicar algunos puntos débiles en esta materia (5). Finalmente, haré una brevísima reflexión conclusiva (6).

1. *Se ha asegurado el derecho de defensa y a la vez se ha dado también un remedio contra la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad ejecutiva en la Iglesia*

Dirigiendo la mirada a la legislación vigente, es necesario observar sobre todo que actualmente ya no se puede decir –como podía hacerse en 1967– que falte la posibilidad de una eficaz defensa de los fieles frente a la actuación de la autoridad ejecutiva en la Iglesia.

a) *Segunda sección de la Signatura Apostólica*

Esa posibilidad se ha asegurado realmente con la institución de la segunda sección de la Signatura Apostólica. Quien, después de haber agotado la vía del recurso jerárquico, no se haya visto satisfecho por la decisión del dicasterio competente de la Curia Romana, puede interponer el recurso judicial a la sección segunda de la Signatura Apostólica, ante la cual tendrá lugar el proceso con todas las garantías del proceso judicial y, por tanto, también con la plena posibilidad de defenderse.

b) *Derecho de defensa en el nivel del recurso jerárquico*

Es preciso además hacer notar que, respecto al derecho de defensa, el Código de 1983 ha cambiado sustancialmente la naturaleza del recurso jerárquico. En efecto, también en el recurso jerárquico el recurrente tiene siempre derecho a servirse de un abogado cualificado. Es más, se le debe asignar patrono de oficio siempre que: *a)* no tenga patrono; *b)* el Superior lo considere necesario (c. 1738): necesario, obviamente, para que el recurrente tenga la posibilidad de defenderse adecuadamente. Por principio, debe reconocerse al abogado el derecho de examinar las actas,

con mayor razón tratándose de abogados que, en cuanto aprobados²⁰, gozan de la confianza de la autoridad eclesiástica y, además, pueden ser obligados bajo juramento a guardar secreto (cfr c. 1455 § 3), así como, por motivos graves, ser eliminados del elenco²¹.

Además de esto, entre otras cosas, se prescribe claramente que «antes de dar un decreto singular, la autoridad debe recoger las noticias y las pruebas necesarias y, en la medida de lo posible, oír a aquellos cuyos derechos puedan verse lesionados» (c. 50); y que las decisiones administrativas deben expresar la motivación, al menos sumariamente (c. 51).

c) *Defensa ante la Curia Romana*

Para ofrecer a los recurrentes la posibilidad de contar con un defensor cualificado ante la Curia Romana, también en los recursos jerárquicos, se han establecido, con la *Pastor bonus*: a) el «Elenco de abogados ante la Curia Romana», que pueden patrocinar ante la Signatura Apostólica y en los recursos jerárquicos ante los otros dicasterios; b) el «Cuerpo de Abogados de la Santa Sede» para asumir el patrocinio de las causas, en nombre de la Santa Sede y por tanto también de los dicasterios de la Curia Romana, ante los tribunales civiles o eclesiásticos (y por tanto también ante la Signatura Apostólica)²². Estos últimos —en

²⁰. Cfr c. 1483, y, por lo que se refiere a la Curia Romana, M.P. *Iusti iudicis* (cit. en nota 22), arts. 1, 3-4, 6 y 9; *Ordinatio* (cit. en nota 22), arts. 14-19, 21.

²¹. Cfr sobre todo c. 1488 § 1, y, por lo que se refiere a la Curia Romana, M.P. *Iusti iudicis* (cit. en nota 22), arts. 5-6 y 8; *Ordinatio* (cit. en nota 22), art. 11.

²². Const. Ap. *Pastor bonus*, arts. 183-185; Motu proprio *Iusti iudicis*, del 26 de junio de 1988, en AAS 80 (1988) 1258-1261; SECRETARIA STATUS,

cuanto nombrados para el foro canónico— asumen ordinariamente también el patrocinio de los fieles que recurren a los dicasterios de la Curia Romana y a la Signatura Apostólica²³.

Tanto en el «Elenco», como en el mencionado «Cuerpo», se trata de abogados particularmente preparados²⁴.

d) *Contra la arbitrariedad*

Cuanto he observado sobre la posibilidad de defensa eficaz de los derechos vale también en lo que concierne al propósito de proveer a un remedio contra la eventual arbitrariedad en el ejercicio de la potestad ejecutiva. En efecto, se trataba de alcanzar con los mismos medios los dos objetivos mencionados.

2. *Potenciación de las soluciones extrajudiciales en perjuicio de los tribunales administrativos locales*

a) *Omisión de la normativa sobre los tribunales administrativos locales*

Sin embargo, en los *Principia* se postulaba claramente la institución en la Iglesia de «tribunales administrativos según los grados y las especies», como *medio* para asegurar la defensa eficaz de los derechos de los fieles frente a los actos de la autoridad administrativa en la Iglesia y, al mismo tiempo, para proveer en contra de una eventual arbitrariedad nociva en el ejercicio de la potestad ejecutiva. En realidad —como he hecho notar más arriba—, a ese medio, al menos a ponerlo

Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio datas «Iusti iudicis», del 23 julio 1990, in AAS 82 (1990) 1630-1634.

²³. Cfr *Pastor bonus*, art. 185 § 1; *Iusti iudicis*, art. 7; *Ordinatio*, art. 7.

²⁴. Cfr sobre todo *Ordinatio*, arts. 2 y 7.

obligatoriamente a disposición de todos, se renunció casi en el último momento antes de la promulgación del Código. Pienso, no obstante, que no se trata en este caso de una «infidelidad» a lo establecido en los *Principia*.

Si, por ejemplo, uno descubre agujeros en el techo de su casa y por tanto la urgencia de la reparación, y se propone en consecuencia reparar el techo con tejas, porque lo considera el medio más adecuado; pero después, durante el trabajo, descubre un material mejor, o simplemente se da cuenta de que sería preferible otro material, y reconstruye con él la cubierta de la casa, renunciando a las tejas, no hay motivo para hablar de una «traición» al propósito inicial, por el hecho de que se haya cambiado el *medio*. Por el contrario, habrá que hablar de un perfeccionamiento en su realización. Algo parecido ha sucedido con el *medio* propuesto en los *Principia*.

De todos modos, cuando fueron formulados los *Principia* se preveía como legítima la posibilidad de un cambio de este tipo. El Card. Felici, en efecto, respondiendo a las observaciones en el aula sinodal, dijo entre otras cosas: «este documento no es una ley fundamental, ni contiene cánones, ni presenta una fórmula de fe. Contiene solamente las directrices, *que durante los trabajos pueden ser incluso revisadas de algún modo*, sobre todo cuando, hecho ya el trabajo que corresponde a los Consultores, se presente a la Comisión de Cardenales. Considerad el texto en este sentido, desde este punto de vista, no desde otro» (cursiva añadida)²⁵.

²⁵. «Sed antequam ad singula deveniam opportunum duco animadvertere hoc documentum neque esse legem fundamentalem neque canones continere neque formulam fidei praeberere. Continet tantum lineas directivas quae in itinere possunt etiam aliquo modo recognosci praesertim quando labor, iam peractus a Consultoribus, praesentabitur Commissioni Cardinalium. Hoc sensu, sub hoc angulo visuali velitis nostrum textum adspicere non sub alio» (*Communicationes* 1 [1969] 93).

b) *Las soluciones fraternas han de considerarse seriamente*

En realidad, el n. 7 (igualmente el n. 6) de los *Principia*, que pone de relieve justamente, inspirado por el Concilio, la necesidad de salvaguardar los derechos de los fieles, en cambio no menciona siquiera en este contexto la necesidad de buscar en la Iglesia, en la medida de lo posible, soluciones fraternas a las controversias²⁶. Y sin embargo, ésta es también una exigencia de la doctrina conciliar, de su enseñanza sobre la naturaleza de la Iglesia.

La naturaleza de la Iglesia –presentada por el Concilio desde distintos puntos de vista, que todos juntos²⁷, nos ayudan a captar su rico misterio, como «communio fidelium», como «Pueblo de Dios», como «Cuerpo Místico de Cristo» y como «Sacramento fundamental»– requiere que los conflictos en la Iglesia se resuelvan con espíritu de amor, de perdón, de verdadera reconciliación (no contentándose tampoco con un simple compromiso); que la solución de los conflictos esté orientada a la sanación de la «communio» lacerada, al restablecimiento de la eficaz colaboración entre los miembros del Cuerpo Místico de Cristo, al refuerzo de la fructuosa realización de la propia vocación por parte de cada uno de los fieles del Pueblo de Dios; a hacer valer los bienes espirituales²⁸. Todo esto puede

²⁶. De algún modo sí viene indicado indirectamente en el n. 3, donde se trata de algunos medios para favorecer en el Código la cura pastoral: «In iure condendo Codex non tantum iustitiam sed etiam sapientem aequitatem colat, quae fructus est benignitatis et caritatis, ad quas virtutes exercendas Codex discretionem atque scientiam Pastorum ac iudicum excitare satagat».

²⁷. Cfr CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Litterae ad catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio*, del 28 de mayo de 1992, n. 1, en AAS 85 (1993) 838.

²⁸. Cfr Z. GROCHOLEWSKI, *Aspetti teologici dell'attività giudiziaria della Chiesa*, en *Teologia e Diritto Canonico* (Studi Giuridici, vol. XII), Città del Vaticano 1987, pp. 197-200; idem en *Monitor Ecclesiasticus* 110 (1985) 492-

conseguirse, sin duda, más fácilmente con las soluciones extrajudiciales que con las victorias y las derrotas procesales.

Es más, añadido en seguida, se trata de la exigencia del Evangelio²⁹, advertida en toda la historia de la Iglesia.

Para un enfoque adecuado de las soluciones a las controversias originadas por un acto administrativo eclesiástico, hay que considerar y componer rectamente estos dos elementos: por una parte, se debe asegurar la posibilidad de una eficaz defensa de los derechos frente a la actuación de la potestad ejecutiva; y por otra, se deben favorecer y proponer como preferibles los medios adecuados para las composiciones extrajudiciales, más fraternas, más evangélicas.

c) *Durante la preparación del Código*

De todos modos es significativo que, aunque en los *Principia* no se menciona, quienes preparaban el nuevo Código dieron – junto a las soluciones judiciales –, una notable importancia a las soluciones pacíficas de las controversias.

Es no menos significativo que también en los proyectos y propuestas de las Iglesias particulares mencionados antes, se diera una importancia predominante a los medios dirigidos a evitar los litigios estrictamente judiciales, que laceran la unidad

496; idem en inglés *Theological Aspects of the Judicial Activity of the Church*, en *The Jurist* 46 (1986) 554-558; en otra traducción inglesa en AA. VV., *Incapacity for Marriage. Jurisprudence and Interpretation*, Acts of the III Gregorian Colloquium, R.M. Sable Coordinator and Editor, Pontificia Universitas Gregoriana, Rome 1987, pp. 5-11; en alemán en un fascículo separado *Theologische Aspekte der kirchlichen Gerichtsbarkeit*, Münster 1986, 49; ID., *La tutela dei diritti dei fedeli e le composizioni stragiudiziali delle controversie*, en *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 282-283.

²⁹. Cfr Mt 5,25-26; 1 Cor 6,7. Vide, al respecto, Z. GROCHOLEWSKI, *La tutela dei diritti...*, pp. 283-286.

de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo, y a la reconciliación fraterna³⁰.

Todo esto demuestra la justa valoración de estos medios en la comunidad eclesial.

d) *Soluciones fraternas en el Código*

Realmente, el Código ha atribuido gran relevancia a la necesidad de buscar esas soluciones extrajudiciales³¹.

Respecto a las controversias entre los fieles y las autoridades administrativas en la Iglesia, el Código se ha preocupado de prever no sólo el recurso al tribunal (esto es, a la Signatura Apostólica), sino también los recursos jerárquicos. En esta dirección se orientan cinco tipos de disposiciones legislativas³²:

— Ya el *procedimiento de emisión de los diversos actos administrativos* singulares prevé la posibilidad de defensa por parte del interesado, y ello, evidentemente, también para evitar actos fácilmente impugnables: cfr por ejemplo, cc. 50; 695 § 2; 697,2º; 698 (con estos tres últimos, véanse también los cc. 729 y 746); 1742 § 1 en relación con 1744 § 1 y 1745,1º; 1749.

— Respecto a los actos administrativos ya emitidos, el c. 1733 § 1 contiene una *apremiante invitación a evitar el litigio*, cuando alguien se considere lesionado en sus derechos; y a buscar «de común acuerdo» una solución equitativa, recurriendo incluso «a la mediación y al estudio de personas prudentes».

— En los §§ 2-3 de ese mismo canon se indica, o se propone, *una vía concreta para llegar a una solución equitativa*, mediante oficios o consejos especialmente constituidos para ese fin.

³⁰. Cfr Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali regionali...*, *passim*, especialmente pp. 156-157, 160-161.

³¹. Cfr cc. 1341, 1446, 1659, 1676, 1695, 1713-1716, 1718, 1733.

³². Al respecto Cfr Z. GROCHOLEWSKI, *La tutela dei diritti...*, pp. 278-281.

— También la *petición* de la que habla el c. 1734, como requisito previo para poder presentar una verdadera impugnación, puede considerarse justamente como un nuevo intento de evitar el recurso jerárquico³³.

— Finalmente, no carece de importancia la norma según la cual la solución equitativa debe buscarse *en cualquier momento*, incluso después de la interposición del recurso, «siempre que se abrigue la esperanza de un feliz resultado» (c. 1733 § 3; cfr también la parte final del § 1 del mismo canon).

e) *Mi opinión*

El hecho de que el Código haya asegurado –con la creación de la segunda sección de la Signatura Apostólica y, en cierta medida, también en el nivel del recurso jerárquico– una eficaz defensa de los derechos de los fieles frente a la actuación de la autoridad ejecutiva en la Iglesia, junto con la potenciación de las vías de solución pacífica de los conflictos (no postulada en el n. 7 de los *Principia*), en realidad ha eliminado la indicación sobre la constitución de los tribunales administrativos locales. Pienso que ello no constituye una «traición» al n. 7 de los *Principia*, sino una maduración postulada por principios de naturaleza teológica, referidos a la naturaleza de la Iglesia y a la correspondiente actitud que han de adoptar los hijos de Dios.

En otras palabras, considero que el Código ha encontrado un justo equilibrio entre, por una parte, la posibilidad de una adecuada defensa de los derechos, de la que se hablaba (sin esa posibilidad sería inútil proclamar los derechos de los fieles); y,

³³. El art. 119 del *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 4 de febrero de 1992 (AAS 84 [1992] 202-267) prevé esa petición también antes del recurso judicial a la segunda sección de la Signatura Apostólica.

por otra, la normativa dirigida a resolver los conflictos originados por un acto administrativo por vía extrajudicial y evangélica.

El escaso número de recursos a la segunda sección de la Signatura Apostólica, y también el exiguo número de recursos a los tribunales ordinarios (fuera de las causas de nulidad matrimonial), así como la cesación de la insistencia sobre la creación de los tribunales administrativos locales, demuestran que en la Iglesia no se siente tanto la necesidad de recurrir a verdaderos tribunales para resolver los conflictos, es decir, que en realidad no se experimenta tanto la necesidad de otra red de tribunales.

Por lo demás, ese aumento del número de tribunales, se convertiría para muchísimas Iglesias locales en un peso insostenible, a menos que se contenten con tribunales de escasa preparación específica, que podrían originar ulteriores daños a la «communio fidelium».

3. *Realización de otras especificaciones particulares*

Hasta aquí he tratado del *objetivo fundamental* propuesto en el n. 7 de los *Principia* y del *medio principal* que allí se preveía para alcanzar ese objetivo. Me parece necesario ahora detenerme –aunque sea sólo esquemáticamente– sobre los elementos que he designado al principio como «ulteriores especificaciones» (I,2), para ver en qué medida se encuentran realizados en la actual legislación. Se trata, en todo caso, de elementos que en el n. 7 de los *Principia* se indicaban sobre todo en relación con el tratamiento judicial de las controversias contencioso-administrativas.

a) *Acciones que han de tratarse*

Se apuntaba la necesidad de determinar «qué acciones pueden ser confiadas al juicio de los tribunales administrativos», previendo una cierta dificultad si pudieran impugnarse ante esos tribunales también «las normas de grado inferior [o sea, los actos administrativos generales], si y en la medida en que contradijeran a las de grado superior».

Esa determinación se ha hecho. En la normativa actualmente vigente se encuentra:

— por lo que se refiere *a los actos impugnables*, en el c. 1732, que vale tanto para el recurso jerárquico como para el recurso judicial a la Signatura Apostólica; y además, sólo para la Signatura Apostólica, en el art. 123 de la *Pastor bonus*, donde se establece que debe tratarse de actos administrativos singulares «dados» por los dicasterios de la Curia Romana o «aprobados» por ellos;

— por lo que concierne al *aspecto en que pueden ser impugnados esos actos*, en el art. 123 §§ 1-2 de la *Pastor bonus*, referido a la Signatura Apostólica (violación de alguna ley, en la decisión o en el procedimiento, así como la reparación de los daños causados por el acto ilegítimo), y en los cc. 1737 § 1 y 1739 respecto al recurso jerárquico;

Como se ve, no está prevista *per se*, en el ámbito de la justicia administrativa, la impugnación de los actos administrativos generales.

b) *Procedimiento*

Se pedía que se elaborasen «las normas del proceso administrativo». En la Signatura Apostólica se sigue observando por ahora, en la medida en que no contradice a la actual ley universal,

el procedimiento establecido en las *Normae speciales* aprobadas por Pablo VI en 1968³⁴.

Respecto al procedimiento para los recursos jerárquicos ante las autoridades inferiores, cfr especialmente cc. 1733-1739, 50-51, 57; y ante los dicasterios de la Curia Romana, el *Regolamento Generale della Curia Romana* de 1992³⁵, arts. 118-122.

En el procedimiento ante la Signatura Apostólica se sigue plenamente el postulado del n. 7 de que «se aplique el principio de tutela jurídica igualmente a los superiores y a los súbditos».

Se observa también plenamente el otro postulado expresado en ese mismo lugar, o sea, «que se tenga como regla general que todo proceso sea público, a no ser que el juez, por las particulares circunstancias de las cosas o de las personas, en casos bien determinados, considere que debe procederse en secreto», y que en consecuencia «se pongan en conocimiento del recurrente [...] todos los motivos aducidos en su contra».

Estos dos postulados concretos, y de manera particular el segundo, se encuentran realizados en gran medida también en la estructura actual del recurso jerárquico, en cuanto, como ya he indicado, el recurrente tiene derecho a servirse de un abogado (c. 1738), al que por principio no se puede negar el acceso a las actas.

c) *Institución de las estructuras*

En el n. 7 de los *Principia* se trataba de las estructuras refiriéndose a los tribunales administrativos, especialmente locales. Al omitirse las normas sobre los tribunales administrativos, decayó la cuestión de las estructuras.

³⁴. Cfr *supra*, nota 9.

³⁵. AAS 84 (1992) 201-267.

Pero vale la pena recordar lo que prescribe el Código respecto a las estructuras para las soluciones pacíficas: «La Conferencia episcopal puede ordenar que en cada diócesis se cree establemente un departamento o consejo que, según las normas de la misma Conferencia, tenga como función buscar y sugerir soluciones equitativas; y si la Conferencia no adopta esa decisión, el Obispo puede establecer ese consejo o departamento» (c. 1733 § 2). Es ciertamente positivo que el Código haya dejado esas estructuras a la determinación de las Iglesias particulares, para que se puedan tener en cuenta la mentalidad, las condiciones y las necesidades de cada una de ellas.

4. *Otros perfeccionamientos de la justicia administrativa*

Es necesario observar que el desarrollo de la normativa de la Iglesia respecto a la justicia administrativa no se ha limitado a los elementos directamente postulados o mencionados en el n. 7 de los *Principia*, sino que es más amplio, y se ve completado además por algunas determinaciones jurisprudenciales. Por tanto, aunque no sea el objeto directo del tema que se me ha propuesto, considero oportuno –para completar la imagen delineada y para valorarla rectamente– mencionar también las siguientes líneas de desarrollo de la reciente normativa sobre la materia:

a) *Respecto a los actos administrativos impugnables*

Es fácil percibir la importancia de la normativa sobre los actos administrativos para la recta actuación de la justicia administrativa. En ese ámbito se ha producido un grandísimo progreso en el Código de 1983. En el Código anterior no se encontraba ni siquiera la expresión «actus administrativus», ni «potestas administrativa» o «executiva»; en cambio, el Código actual trata directamente de los actos administrativos singulares –

es decir, aquellos que pueden ser impugnados mediante recurso jerárquico y mediante el recurso judicial ante la Signatura Apostólica (cfr c. 1732)— en 59 cánones (cc. 35-93), y además se encuentra esparcida por todo el Código la normativa reelaborada sobre diversos actos administrativos singulares específicos³⁶.

b) *Sobre la solución de conflictos en el ámbito de la potestad ejecutiva de la Iglesia*

Además de cuanto se ha dicho de la normativa sobre la solución pacífica de las controversias, es preciso tener presente el resto de las normas contenidas en los cc. 1732-1734³⁷ y en la *Pastor bonus*, sobre todo arts. 15-16, 19, 183-185; en el vigente *Regolamento Generale della Curia Romana*, arts. 110, 118-122; y en algunas interpretaciones auténticas mencionadas anteriormente, en el epígrafe II.1, en la medida en que, además de a la Signatura Apostólica, se refieren al recurso jerárquico.

c) *Respecto al tratamiento judicial de los recursos en la segunda sección de la Signatura Apostólica (ante la cual, evidentemente, tienen resonancia también todas las determinaciones indicadas en a y b):*

— Sería preciso recordar todos los perfeccionamientos normativos indicados *supra*, bajo el epígrafe II.1, que en realidad se refieren: a la constitución de la Signatura Apostólica; a la posibilidad de excepción de sospecha contra los jueces; al modo de

³⁶. Cfr Z. GROCHOLEWSKI, *Atti e ricorsi amministrativi*, en *Apollinaris* 57 (1984) 263-268; idem en AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico* («Utrumque Ius», 9), Roma 1993, 506-511.

³⁷. Cfr *ibidem*, pp. 268-277 (en «Utrumque Ius» 9, pp. 511-520).

proceder en ella; a las decisiones susceptibles de recurso a la segunda sección; al objeto formal del recurso y por tanto al ámbito de competencia; al concepto de ilegitimidad; a quién puede ser recurrente; al efecto suspensivo o sólo devolutivo del recurso; a las decisiones aprobadas por el Santo Padre; a la motivación de las decisiones; a los abogados.

— Además, en la jurisprudencia han madurado principalmente: *a)* la posibilidad de recurso de la autoridad administrativa inferior contra la reforma de sus decretos por parte de un dicasterio de la Curia Romana³⁸; *b)* una mayor consideración de la autoridad administrativa inferior, cuyo acto haya sido confirmado por un dicasterio de la Curia Romana, como parte resistente en el proceso³⁹.

5. *Elementos que han de perfeccionarse*

No quiero decir con todo esto que en la realidad actual no existan defectos en cuanto a la recta orientación y en cuanto a la debida aplicación de la justicia administrativa en la Iglesia.

- a) Una deficiente sensibilidad en la Iglesia para observar un correcto procedimiento en la emisión de los actos administrativos singulares*

Considero que es éste el defecto principal. En efecto, en los casos en que la decisión o el decreto administrativo en sustancia

³⁸. Al respecto Cfr Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità amministrativa come ricorrente alla Sectio Altera della Segnatura Apostolica*, en *Apollinaris* 55 (1982) 752-779. La orientación allí expresada ha sido seguida después constantemente por la Signatura.

³⁹. Cfr al respecto Z. GROCHOLEWSKI, *La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura apostolica*, en AA.VV., *Iustus Iudex* (Festgabe für P. Wesemann zum 75. Geburtstag), Essen 1990, pp. 469-489; idem, en *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 81-102.

es legítimo y justo, pero no se ha observado el debido procedimiento, los recursos: *a)* son en sí mismos inútiles, puesto que si se declarara, en el recurso jerárquico o por parte de la Signatura Apostólica, la ilegitimidad del acto sólo «in procedendo», la autoridad competente podrá entonces simplemente repetir el acto observando el procedimiento previsto; *b)* al mismo tiempo, son ciertamente dañosos, porque alimentan resentimientos y divisiones.

Por otra parte, no es justo –y considero particularmente oportuno subrayarlo– pretender de las autoridades que juzgan de los recursos que no declaren la ilegitimidad cuando adviertan sólo defectos procedimentales y no descubran faltas «in decernendo». No es justo porque a cada uno de los que deben aceptar una decisión gravosa para ellos (por ejemplo, la remoción de un oficio, la dimisión de un instituto de vida consagrada, la inflicción de una pena), se le debe reconocer el derecho a que en la adopción de esa decisión se observe el procedimiento establecido, que está dispuesto precisamente para servir a los valores sustanciales, es decir, para garantizar un juicio correcto «in decernendo» y para hacer más fácil aceptar la decisión.

A este respecto ha de observarse que los procedimientos previstos por el Código para la emisión de los actos administrativos son verdaderamente sencillos.

Ocurre también en ocasiones que la autoridad eclesiástica, al emitir un acto administrativo singular, emplea un procedimiento mucho más abundante y complicado que el previsto por la ley, pero omite en cambio lo que es necesario. Evidentemente, «superflua non nocent»⁴⁰, incluso pueden ser a veces útiles; pero la omisión de lo necesario puede producir consecuencias graves.

Todo esto enlaza también con la adecuada preparación de los canonistas. Obviamente, no todos los Obispos, Superiores de

⁴⁰. Regla de derecho: Cfr L. DE MAURI, *Regulae juris*, Mediolani 1976¹¹, 217.

institutos de vida consagrada o titulares de otros oficios de responsabilidad son canonistas, pero es desilusionante que no reciban de los canonistas que colaboran con ellos el suficiente asesoramiento especializado para proceder de modo adecuado y seguro.

b) *Omisión del tratamiento del «mérito»*

Los dicasterios de la Curia Romana no parecen darse siempre cuenta del ámbito de su competencia al examinar los recursos jerárquicos. A pesar de que la ley atribuye de manera muy clara al Superior jerárquico el conocimiento de los recursos tanto por lo que se refiere a la legitimidad del acto como por lo que respecta al «mérito» (o sea, a su oportunidad, utilidad, adecuación, etc.)⁴¹, no raramente algún dicasterio de la Curia Romana, al confirmar el acto impugnado se limita a constatar su legitimidad «sive in procedendo sive in decernendo» –como si quisiera sólo precaverse contra una eventual impugnación ante la segunda sección de la Signatura Apostólica (no competente sobre el mérito, sino sólo sobre la legitimidad del acto)–, sin afrontar en modo alguno la cuestión de mérito suscitada.

Posteriormente, en caso de recurso judicial a la segunda sección de la Signatura Apostólica, ésta, obviamente, no puede tratar del mérito, en el sentido señalado; pero no excluyo que se pueda acusar al decreto de un dicasterio de la Curia Romana de ilegitimidad, por no haber tratado la cuestión de mérito suscitada

⁴¹. Cfr cc. 1737 § 1 y 1739. Este último canon contiene toda la gama de las posibles decisiones por parte del Superior jerárquico, o sea, que puede, «según lo requiera el caso, no sólo confirmar o declarar nulo el decreto, sino también rescindirlo o revocarlo, o si lo juzga más conveniente, corregirlo, sustituirlo por otro u obrogarlo».

Respecto a los dicasterios de la Curia Romana Cfr *Pastor bonus*, art. 19 § 1 y sobre todo *Regolamento Generale della Curia Romana*, art. 120 § 1.

en el recurso jerárquico. Evidentemente, la constatación de esa ilegitimidad por parte de la segunda sección de la Signatura Apostólica tendría como efecto que el dicasterio en cuestión debería tratar la cuestión de mérito y pronunciarse sobre ella. En todo caso, hasta ahora nunca se ha planteado expresamente una acusación de ilegitimidad de ese tipo ante la Signatura Apostólica.

c) *La motivación de las decisiones*

El c. 51 establece: «El decreto se ha de dar por escrito y, si se trata de una decisión, haciendo constar, al menos sumariamente, los motivos». Esto vale plenamente en el caso de la resolución sobre un recurso jerárquico: en efecto, en ese caso se trata siempre de una decisión. El *Regolamento generale della Curia Romana*, art. 120 § 3, confirma: «El dicasterio debe motivar sus decisiones sobre los recursos examinados, con arreglo al c. 51 del Código de Derecho Canónico [...]».

Aparte de algunos decretos de los dicasterios de la Curia Romana que contienen abundante motivación (y no sólo sumaria), no pocos decretos suscitan dudas sobre si la motivación, que a veces sólo enumera lo que se ha «visto», puede calificarse como «al menos sumaria». Esta tendencia a una motivación casi inexistente es ciertamente una herencia del período, por fortuna pasado, en que los dicasterios de la Curia Romana no indicaban los motivos de sus decisiones.

La motivación, en primer lugar, debe ayudar al interesado a decidir si interponer un ulterior recurso o desistir (porque a la vista de los motivos podría convencerse de la inutilidad de un nuevo recurso). La motivación es necesaria para preparar una adecuada impugnación. Pero además –independientemente de que se interponga o no un ulterior recurso–, demuestra el respeto hacia la persona del recurrente, indicándole las razones que han

llevado al Superior a tomar esa decisión y no otra. La motivación es, en fin, en cierto sentido, también una demostración de la seriedad de la actuación de quien adopta la decisión. Por tanto, se ordena también a eliminar la sospecha de arbitrariedad.

Aun dándome cuenta de la frecuente inutilidad de una motivación exhaustiva o abundante, que incluya todos los particulares, pienso que –por las razones apuntadas– debe cuidarse bien la motivación, al menos sumaria, con una referencia a las acusaciones planteadas.

d) *Cuestiones de orientación legislativa o jurisprudencial*

Hasta aquí he indicado algunas cuestiones que conciernen a la aplicación práctica de los principios claros. Pero quisiera también hacer alguna alusión a otros problemas menos claros, que requieren una mayor discusión y la consiguiente orientación legislativa o jurisprudencial. Entre éstos, me parece oportuno mencionar:

— Toda la problemática de la *reparación de los daños* provocados con un acto administrativo ilegítimo; problemática que no halla mucha resonancia en la actual legislación ni en la jurisprudencia de la Signatura Apostólica.

— La cuestión de la *correcta orientación y estructuración y del adecuado funcionamiento de los departamentos o consejos mencionados, que deben buscar y sugerir soluciones equitativas*. Esta problemática, como he señalado, se ha dejado a la legislación y experimentación de las Iglesias locales. Por una parte, se trata de estructuras que en sí mismas responden íntimamente a la naturaleza de la Iglesia, pero por otra parte, hasta ahora son relativamente pocas las Conferencias episcopales que han tomado la decisión de instituir esos departamentos o consejos (algunas han dejado expresamente a la experimentación de cada Obispo la búsqueda de instrumentos para la composición

de las controversias)⁴². Se proponen a veces estructuras y procedimientos poco claros, complicados, que parecen tender de hecho, por exceso, a impedir la posibilidad de verdaderos recursos. Los procedimientos de este tipo podrían incluso ofuscar la efectiva posibilidad de una conciliación.

Pienso que –con vistas a encontrar una solución equitativa (y esto ayudaría también mucho para la correcta orientación de un eventual recurso jerárquico)– esos departamentos o consejos deberían ser capaces, sobre todo, de individuar claramente los problemas y dar una información exacta sobre el derecho implicado, sustantivo y procedimental, así como sobre las vías posibles para la solución del conflicto.

— La cuestión de si descartar completamente la idea de los *tribunales administrativos locales* o emprender el camino hacia su eventual implantación: tampoco esto está claro. El Código, como he señalado, parece haber dejado la puerta abierta, postulando de ese modo una ulterior discusión al respecto.

— La posibilidad de tomar en consideración los llamados *intereses difusos*, como legítimos para interponer un verdadero recurso: igualmente este punto, aunque se han hecho algunas observaciones al respecto por parte de la literatura canónica, requeriría una mayor profundización, necesariamente examinando de manera especial la naturaleza de la potestad en la Iglesia.

— La posibilidad de impugnar los *decretos administrativos generales ejecutorios* (mediante el recurso jerárquico y ante la Signatura Apostólica).

Podrían indicarse, evidentemente, otras cuestiones de este tipo.

⁴². Cfr J. T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al CIC*, Milano 1990.

6. *Conclusión*

A la luz de las consideraciones expresadas, la normativa sobre la justicia administrativa en la Iglesia parece haberse orientado en la dirección adecuada. El camino se ha revelado fatigoso, pero marcado por una maduración y por una valorización de los elementos específicos del ordenamiento canónico, postulados por el Evangelio, por la tradición y, no menos, por el Concilio Vaticano II.

APÉNDICE

*Escritos más recientes sobre la justicia administrativa en la Iglesia*⁴³

- AA. VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa* («Studi Giuridici», vol. 24), Città del Vaticano 1991.
- AA.VV., *La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto canonico, civile, amministrativo* (Atti dell'incontro interdisciplinare tenuto nella Università di Macerata il 20 gennaio 1990), Milano 1991.
- ACEBAL LUJÁN, J. L., *El M.P. «Iusti Iudicis». Texto y Comentario*, en *Revista Española de Derecho Canónico* 46 (1989) 279-288.
- ACEBAL LUJÁN, J. L., *Normas para la ejecución de la carta apostólica M.P. «Iusti Iudicis»*, en *Revista Española de Derecho Canónico* 48 (1991) 607-618.
- AMANN, T. A., *Der Verwaltungsakt für Einzelfälle im kirchlichen Gerichtswesen*, en AA. VV., *Iustitia in Caritate*, Festgabe für Ernst Rößler, Frankfurt am Main 1997, 487-500.
- BACCARI, R., *Scritti minori*, a cura dell'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza - Istituto di Diritto Pubblico, Bari 1997, tomo primo: *Diritto Canonico*, pp. 145-155, 185-188, 189-202, 203-218, 219-233, 235-242, 243-255, 257-259, 293-296, 305-322, 397-410.
- BARR, D. L., BELL, J. P., PERRY, J. N., MCGREEVY, P., *CLSA Experiment in Due Process Committee Report*, en *Proceedings of the Annual Convention of the Canon Law Society of America* 56 (1994) 68-79.
- BARRETT, R. J., *The Rights of the Faithful: Some Signs of Progress*, en *Irish Theological Quarterly* 61 (1995) 250-264.
- BARRETT, R. J., *Recourse and the Principle of «Non lex sed corruptio legis»*, en *Ecclesiastical Law Journal* 4(1997) 728-737.
- BARRETT, R. J., *The Capacity to Act in Court Against an Administrative Act which Injures a Group of the Christian Faithful in its Juridical Sphere* (Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae), Romae 1996.
- BARRETT, R. J., *The non-recognised Association and its Capacity to act in Court*, en *Periodica* 86 (1997) 677-711, 87 (1998) 39-79.

⁴³. Cfr *supra*, nota 17.

- BASS, R. E., *Due Process: Conciliation and Arbitration*, en *Proceedings of the Annual Convention of the Canon Law Society of America* 53 (1991) 63-76.
- BEAL, J. P., *Administrative Tribunals in the Church: An Idea Whose Time Has Come or An Idea Whose Time Has Gone?*, en *Proceedings of the Annual Convention of the Canon Law Society of America* 55 (1993) 39-71.
- BERLINGÒ, S., *Il diritto al "processo" (can. 221, § 2, C.I.C.) in alcune procedure particolari*, en *Fidelium Iura* 3 (1993) 339-358.
- BETTETINI, A., *Il diritto d'azione come diritto fondamentale del fedele*, en AA.VV., *Diritto "per valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, 153-173: 162-166.
- BRENNAN, D., *Parishioners Bringing Suit Against a Priest*, en *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1996, 68-71.
- CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Protection of Rights of Persons in the Church*, Revised Report on the Subject of Due Process, Washington D.C. 1991.
- CIPROTTI, P., *La giustizia amministrativa nell'ordinamento giuridico vaticano*, en *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 449-465.
- COPPOLA, R., *La giustizia amministrativa nella Chiesa: stato attuale e prospettive*, en AA.VV., *Esercizio del potere e prassi della consultazione* («*Utrumque Ius*», 21), Città del Vaticano 1991, 333-356.
- CORECCO, E., *Ius et Communio*, Scritti di Diritto Canonico, a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Ed. Piemme, Casale Monferrato 1997, vol. I, 514-521.
- CORIDEN, J. A., *The Vindication of Parish Rights*, en *The Jurist* 54 (1994) 22-39.
- COUGHLIN, J. J., *Administrative Justice at the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura and the United States Supreme Court: A Comparative Study* (Dissertazione alla Pontificia Università Gregoriana), Roma 1994.
- DANEELS, F., *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, en AA.VV., *La Parrocchia* («*Studi Giuridici*», vol. 43), Città del Vaticano 1997, 85-112; *idem* en «*Ius Ecclesiae*» 10 (1998) 111-148.
- DANEELS, F., *The Suppression of Parishes and the Reduction of a Church to Profane Use in the Light of the Jurisprudence of the Apostolic Signatura*, en *Forum* 8 (1997) 287-293.
- DANEELS, F., *The Removal or Transfer of a Pastor in the Light of the Jurisprudence of the Apostolic Signatura*, en *Forum* 8 (1997) 295-301.

- D'OSTILIO, F., *Il diritto amministrativo della Chiesa*, Città del Vaticano 1995.
- DI MATTIA, G., *La procedura penale giudiziaria e amministrativa nel CCEO e nel CIC: Riflessioni comparative*, en AA.VV., *Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Kaslik, 24-29 aprilis 1995), Kaslik (Libano) 1996, 447-489: 480-481.
- GEFAELL, P., *La tutela del soggetto nella perdita dell'ufficio*, en *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 131-152.
- GRAZIANI, E., *La giustizia amministrativa nell'ordinamento canonico*, en *Ephemerides Iuris Canonici* 47 (1991) 199-221.
- GRAZIANI, E., *Lezioni di giustizia amministrativa* («Studi Giuridici» 44), Città del Vaticano 1997.
- GROCHOLEWSKI, Z., *La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica*, en *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag*, Essen 1990, 469-489; idem en *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 81-102.
- GROCHOLEWSKI, Z., *Die Verwaltungsgerichtsbarkeit der Apostolischen Signatur*, en *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 40 (1991) 3-22; idem en italiano *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, en *Ius Ecclesiae* 4 (1992) 3-22; idem en español *La justicia administrativa ante la Signatura Apostólica*, en *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 4 (1997) 177-197.
- GROCHOLEWSKI, Z., *De ordinatione ac munere tribunalium in Ecclesia ratione quoque habita iustitiae administrativae*, en *Ephemerides Iuris Canonici* 48 (1992) 47-84: 66-74; idem en eslovaco *O zriadení a úlohe tribunálov v Cirkvi s prihliadnutím na administratívnu spravodlivosť*, en *Ius et Iustitia*, vol. I, Spisské Podhradie 1992, 15-66: 33-43, y en GROCHOLEWSKI, Z., *Stúdie z procesného kanonického práva*, pod redakciou J. Duda, Spisská Kapitula - Spisské Podhradie 1995, pp. 45-89: 73-84.
- GROCHOLEWSKI, Z., *La giustizia amministrativa nel diritto canonico ed in quello statale*, en *Ephemerides Iuris Canonici* 48 (1992) 393-403.
- GROCHOLEWSKI, Z., *La tutela dei diritti dei fedeli e le composizioni stragiudiziali delle controversie*, en *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 273-286.
- GROCHOLEWSKI, Z., *Il processo contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica*, en *Forum* 7 (1996) 277-294; idem en eslovaco *Sporovy administratívny proces na Apostolskej Signatúre*, en *Ius et Iustitia*, vol. V, Spisské Podhradie 1997, 217-230.
- GROCHOLEWSKI, Z., *Trasferimento e rimozione del parroco*, en AA.VV., *La Parrocchia* («Studi Giuridici», vol. 43), Città del Vaticano 1997, 199-247.

- GROCHOLEWSKI, Z., *Comentario al c. 1445*, en VV.AA., *Comentario Exegético al CIC* (coordinado y dirigido por A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña), vol. IV/1, Pamplona 1996 (2ª ed. 1997), 905-907, 910-911.
- HABISCH, A., *Kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit? Sozialphilosophische Überlegungen zu einem bleibenden Desiderat*, en *Archiv für Katholisches Kirchenrecht* 162 (1993) 427-450.
- HERRANZ, J., *La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983*, en *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 433-453.
- HAYWARD, P., *Changes in ecclesiastical administrative justice brought about by the new competence of the «Sectio altera» of the Apostolic Signatura to award damages*, en *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 643-673.
- HAYWARD, P., *Administrative Justice According to the Apostolic Constitution «Pastor bonus»* (Dissertazione all'Ateneo Romano della Santa Croce), Roma 1993.
- HAYWARD, P., *The Apostolic Signatura and Disputes Involving the Transfer of Parish Priests*, en *Newsletter of Canon Law Society of Great Britain & Ireland*, N° 104 (December 1995) 24-32.
- INGELS, G., ORSY, L., *Administrative Decrees and the Discretionary Powers of the Bishop (Canon 57)*, en *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1991, 68-71.
- LABANDEIRA, E., *El recurso jerárquico ante la Curia Romana*, en *Ius Canonicum* 30/60 (1990) 449-465.
- LABANDEIRA, E., *Il ricorso gerarchico canonico: «petitum» et «causa petendi»*, en *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 103-118.
- LABANDEIRA, E., *La defensa de los administrados en el Derecho Canónico*, en *Ius Canonicum* 31/61 (1991) 271-288.
- LABANDEIRA, E., *Cuestiones de Derecho Administrativo Canónico*, Pamplona 1992.
- LABANDEIRA, E., *Tratado de Derecho administrativo canónico*, Pamplona 1993; *idem* en italiano *Trattato di Diritto Amministrativo Canonico*, Milano 1994.
- LE TOURNEAU, D., *Les droits et les devoirs fondamentaux des fidèles et la communion dans l'Église*, en *Ius in vita et in missione Ecclesiae* (Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici), Città del Vaticano 1994, 367-382.
- LE TOURNEAU, D., *Quelle protection pour les droits et les devoirs fondamentaux des fidèles dans l'Église?*, en «*Studia Canonica*» 28 (1994) 59-83.

- LE TOURNEAU, D., *La protection des droits fondamentaux des fidèles dans l'Église d'après les écrits de Pedro Lombardia*, en *Fidelium Iura* 6 (1996) 181-215.
- LLOBELL, J., *Il «petitum» e la «causa petendi» nel ricorso contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della Cost. Ap. «Pastor bonus»*, en *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 119-150.
- MARCHESI, M., *I ricorsi gerarchici presso i dicasteri della Curia romana*, en *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 71-96.
- MARTÍN DE AGAR, J., *Note sul diritto particolare delle Conferenze Episcopali*, en *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 593-632: 632.
- McKAY, G., *Considerations on the Nature of the Parochial Office and the Process for Transfer of Parish Priest*, en *Newsletter of Canon Law Society of Great Britain & Ireland*, N° 88 (December 1991), 35-42; idem en italiano *Procedura per un ricorso gerarchico contro un trasferimento imposto (cc. 1748-1752)*, en *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992) 351-357.
- MENDONÇA, A., *The Effect of the Recourse Against the Decree of Removal of a Parish Priest*, en *Studia Canonica* 25 (1991) 139-153.
- MIRAS, J., *El contencioso-administrativo canónico en la Constitución Apostólica «Pastor Bonus»*, en *Ius Canonicum* 30/60 (1990) 409-422.
- MIRAS, J., *Comentarios a la respuesta autentica de 20.VI.1987*, en *Ius Canonicum* 31/61 (1991) 211-222.
- MIRAS, J., *Brevi note sul contenzioso-amministrativo canonico*, en *Ius Ecclesiae* 3 (1991) 693-697.
- MIRAS, J. *Comentario al c. 57*, en VV.AA., *Comentario Exegético al CIC* (coordinado y dirigido por A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña), vol. I, Pamplona 1996 (2ª ed. 1997), 580-584.
- MIRAS, J. *Introducción a la Sec. I de la Part. V del Lib. VII: «Del recurso contra los decretos administrativos»*, y *comentario a los cánones 1732-1739*, en VV.AA., *Comentario Exegético al CIC*, cit., vol. IV/2, 2117-2164.
- MIRAS, J., *Sentido ministerial de la potestad de gobierno y tutela jurídica en el derecho administrativo canónico*, en *Fidelium Iura* 7 (1997) 29-70.
- MONETA, P., *La tutela dei diritti dei fedeli di fronte all'autorità amministrativa*, en *Fidelium Iura* 3 (1993) 281-306.
- MONETA, P., *I ricorsi amministrativi nel Codice per le Chiese Orientali*, en *Incontro fra canonici d'oriente e d'occidente* (Atti del Congresso Internazionale, a cura di R. Coppola), Bari 1994, vol. II, 557-570;

- MONTINI, P., *L'esecuzione delle sentenze della «Sectio Altera» della Segnatura Apostolica. Il significato di una lacuna*, en *Iustus Iudex*. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag, Essen 1990, 553-571.
- MONTINI, P., *Problemata quaedam de silentio et recursu iuxta can. 57 C.I.C.*, en *Periodica* 80 (1991) 469-498.
- MONTINI, P., *De querela nullitatis deque restitutione in integrum adversus sententias Sectionis Alterius Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis*, en *Periodica* 82 (1993) 669-697.
- MONTINI, P., *Il silenzio dei superiori (c. 57)*, en *Quaderni di diritto ecclesiale* 7 (1994) 79-97.
- MONTINI, P., *Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli*, en *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 287-320.
- MONTINI, P., *La difesa dei diritti dei fedeli nella Chiesa. Il danno e la sua riparazione nella giustizia amministrativa canonica* (Dissertatio ad doctoratum in Facultate Iuris Canonici Pont. Universitatis Gregorianae), Roma 1997.
- NAVARRO, L., *La tutela giudiziaria dei soggetti senza personalità giuridica canonica*, en *Ius Ecclesiae* 9 (1997) 265-287; *idem* en AA.VV., *LA giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna* («Studi Giuridici», 45), Città del Vaticano 1997, 211-228.
- PAGÉ, R., *La Signature apostolique et la suppression du statut canonique de l'Armée de Marie*, en *Studia Canonica* 25 (1991) 403-415.
- PALOS PEÑARROYA, C., *Abogados y procuradores en la Curia Romana* (Thesis ad Doctoratum apud Pont. Athenaeum Sanctae Crucis), Romae 1996: pp. 151-275.
- PAPROCKI, T., *Rights of Christians in the Local Church: Canon Law Procedures in Light of Civil Law Principles of Administrative Justice*, en *Studia Canonica* 24 (1990) 427-442.
- PAPROCKI, T., *Vindication and Defense of the Rights of the Christian Faithful through Administrative Recourse in the Local Church* (Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in Facultate Iuris Canonici Pont. Universitatis Gregorianae), Romae 1991.
- PAPROCKI, T., *Parish Closings and Administrative Recourse to the Apostolic See: Recent Experiences of the Archdiocese of Chicago*, en *The Jurist* 55 (1995) 875-896.
- PERRY, J. N., *Accessibility of Due Process for the Laity*, en *Proceedings of the Annual Convention of the Canon Law Society of America* 52 (1990) 65-82.
- PROVOST, J. H., *Due Process*, en *CLSA Advisory Opinions 1984-1993*, Washington 1995, 490.

- PUNDERSON, J., *Contentious-Administrative Recourse to the Second Section of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, en *Forum* 7 (1996) 295-304.
- PUNDERSON, J., *Recourse to the Apostolic Signatura* (Basic information sheet given to persons who make recourse to the Signatura or at least indicate an interest in doing so), en *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1997, 27-31.
- REGOJO BACARDÍ, G., *Pautas para una concepción canónica del resarcimiento de daños*, en *Fidelium Iura* 4 (1994) 107-162.
- SCHWANGER, K., *Contentious-Administrative Recourse in the Juridical Structure of the Church: Juridical and Theological Considerations* (Thesis ad doctoratum in Facultate Iuris Canonici Pont. Universitatis S. Thomae Aquinatis), Roma 1997.
- THÉRIAULT, M., *Le «beneficium novae audientiae» dans la procédure de recours contre les décrets administratif*, en *Studia Canonica* 29 (1995) 85-101.
- THÉRIAULT, M., *La procédure des Recours Administratifs: Survol et Évaluation*, en *Proceedings of the Annual Convention of the Canon Law Society of America* 57 (1995) 387-427.
- TOGNONI, G., *La tutela degli interessi diffusi nell'ordinamento canonico*, en *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 321-344.
- URRUTIA, F. J., *Quandonam habeatur approbatio in «forma specifica»*, en *Periodica* 80 (1991) 3-17.
- VALDRINI, P., *Les recours canoniques offerts aux animateurs pastoraux*, en *L'année canonique* 35 (1992) 55-60.
- VAN DEN HOUT, A., *L'ecclesialità del processo contenzioso-ordinario e del contenzioso-amministrativo* (Thesis ad doctoratum in Facultate Iuris Canonici apud Pont. Athenaeum Sanctae Crucis), Roma 1998.
- VENTRELLA, C., *La tutela degli interessi diffusi nel diritto amministrativo italiano e nell'ordinamento canonico*, en AA. VV., *Diritto canonico e comparazione*, Torino 1992, 183-196.
- VIANA, A., *El Reglamento general de la Curia Romana (4.II.1992). Aspectos generales y regulación de las aprobaciones pontificias en forma específica*, en *Ius Canonicum* 32/64 (1992) 501-529.
- VONDENBERGER, V., *Effective Due Process is Possible in the Church*, en *Studia Canonica* 30 (1996) 163-176.
- ZUANAZZI, I., *Contributo all'individuazione di una struttura deontica della funzione amministrativa a servizio della comunione ecclesiale*, en *Ius in vita et in missione Ecclesiae* (Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici

occorrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici), Città del Vaticano 1994, 237-254.

ZUANAZZI, I., *Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica*, en *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 37-69.

ZUANAZZI, I., *La legittimazione a ricorrere "uti fideles" per la tutela dei diritti comunitari*, en AA.VV., *Diritto "per valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, 399-450.